



# INADI

Instituto para el Desarrollo Industrial  
y la Transformación Digital A.C.

La voz  
del INADI Núm. 17



## El reposicionamiento de América del Norte en una era de transición geopolítica. Oportunidades y desafíos para México\*

Isidro Morales | enero, 2025



## I. Introducción

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, América del Norte entró en un punto de inflexión que aceleró la fragmentación en la que ya se encontraba. Con todo, y a pesar de que Trump amagó con cancelar unilateralmente el pacto comercial que le dio un perfil a la región, se logró negociar uno nuevo que reconoció, de facto, la importancia estratégica de los vecinos situados al norte y sur de los Estados Unidos. Con el regreso de los demócratas al Congreso y de Biden a la Casa Blanca, América del Norte ha recobrado una nueva dimensión geopolítica, producto de las tensiones comerciales sinoestadounidenses y del revisionismo geopolítico que implicó la invasión de Rusia a Ucrania.

El presente artículo revisa esta súbita revaloración geopolítica de los vecinos estratégicos de Estados Unidos. Analiza lo que está en juego y la política reactiva y de repliegue soberanista que ha caracterizado al gobierno mexicano, lo que le ha impedido entender las oportunidades y desafíos a los que se enfrenta. Dividido en cuatro secciones, la primera repasa el impacto de la administración Trump en la política comercial estadounidense, que implicó, en muchos sentidos, el fin de la narrativa neoliberal bajo la cual Washington había organizado y administrado sus relaciones comerciales con el mundo. La segunda explica la magnitud y alcance de la nueva estrategia científico-tecnológica desplegada por la administración Biden para hacer frente al ascenso económico de China. Es el regreso del Estado promotor similar a lo que sucedió durante la segunda postguerra, aunque esta vez envuelto con prioridades de seguridad nacional y cálculos geopolíticos. La tercera parte intenta entender el repliegue soberanista mexicano, en una coyuntura en donde los vertiginosos cambios internacionales condicionan el éxito o fracaso de cualquier política nacional. Finalmente, la última sección explora las ventanas de oportunidad que México podría tener ante la estrategia de relocalización "amistosa" que se desprende de la nueva política industrial estadounidense y su posible impacto para el futuro de América del Norte.

---

\* Este ensayo formó parte del libro "El T-MEC en el marco de la confrontación China-Estados Unidos", que fue publicado en 2023.

## II. Crisis del modelo neoliberal en Norteamérica y el desafío comercial chino

Los términos en que Estados Unidos renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)<sup>1</sup> marcan el fin del modelo neoliberal que atravesó todo el espíritu del acuerdo para dar paso a una en donde los intereses de los estados se imponen sobre los de mercado. La renegociación se hizo al ritmo y capricho de Trump, quien consideró, desde su campaña presidencial de 2016, que el TLCAN había sido un acuerdo “reprobable” (“*nasty agreement*”) que provocó pérdida de empleos y beneficios comerciales a favor de México. Si bien la renegociación del TLCAN tuvo lugar durante la administración de Enrique Peña (diciembre de 2012 a noviembre de 2018), el equipo del entonces presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), logró participar en la renegociación del acuerdo y se mostró satisfecho con el documento que lo sustituyó, el ahora llamado Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) que entró en vigor en julio de 2020. El que se hubiera suprimido el calificativo de “libre comercio” no fue casualidad, pues sugería que la era de la proliferación de los acuerdos que sustentaban dicho nombre y que tanto promovió Washington desde finales de los 1980s, con el acuerdo bilateral firmado entonces con Canadá, llegaba a su fin.

Las negociaciones del T-MEC se llevaron a cabo bajo presiones políticas de Washington sobre todo hacia México. Desde la campaña presidencial de Trump en 2016, México se había convertido en blanco de dos frentes de ataque por parte de Washington: la frontera binacional por la que ingresaban tanto migrantes ilegales y estupefacientes, lo que hacía de ella un problema de seguridad nacional de acuerdo al mandatario estadounidense, y el déficit comercial con México que mostraba, según él, que el TLCAN había ido en detrimento de los Estados Unidos. La retórica de Trump se centró, desde entonces, en la construcción de un muro con el fin de proteger la frontera sur de los migrantes ilegales y del tráfico de ilícitos, y en renegociar el TLCAN con base en la primacía de los intereses estadounidenses o cancelarlo.

La disyuntiva entre renegociación o cancelación del acuerdo cimbró, como un terremoto, las relaciones de Canadá y México con su vecino común. El acuerdo había fungido como una especie de “matrimonio de conveniencia” en virtud del cual los dos países habían podido complementar sus respectivas economías con la de la Unión Americana para elevar

---

<sup>1</sup> El TLCAN entró en vigor el 1 de enero de 1994 y expiró el 1 de julio de 2020, que es cuando entró en vigor el nuevo acuerdo que lo substituyó, el Tratado entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

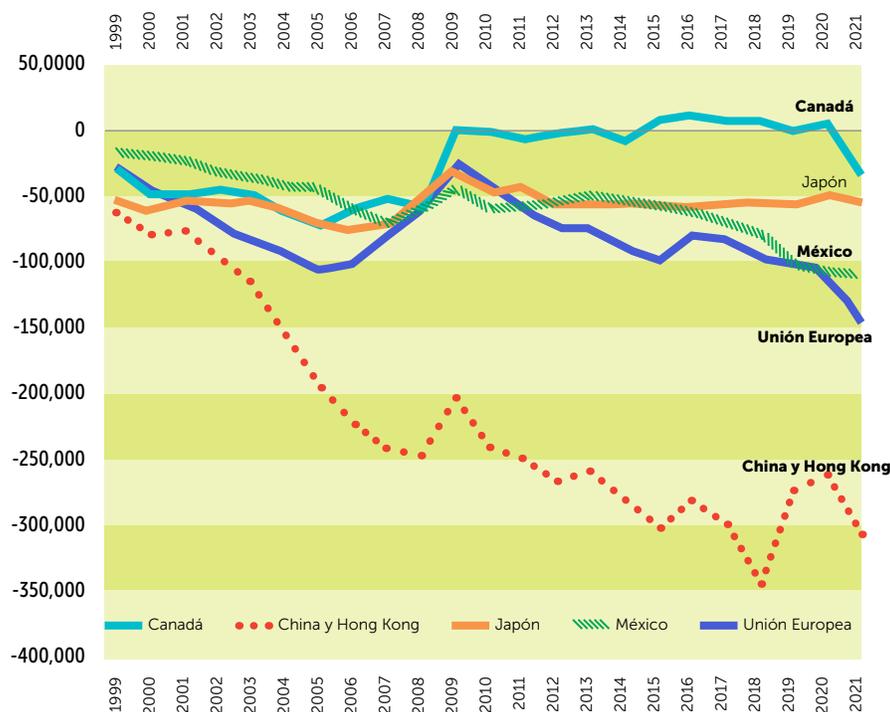
la competitividad económica de América del Norte frente a otros bloques económicos y políticos (Morales, 2018). La amenaza de cancelar el TLCAN si no se renegociaba acorde a los intereses de Washington, y de criminalizar la migración ilegal proveniente de México, dejó en claro que los términos de dicho matrimonio habían terminado. Así es como México, al igual que Canadá, decidió reabrir las negociaciones, a pesar del contexto político adverso, bajo el argumento de que la alternativa de cancelar el TLCAN era peor que llegar a un nuevo acuerdo asimétrico y menos favorable que el anterior. Una cancelación repentina del mismo amenazó con fracturar las cadenas de valor articuladas en torno a industrias clave de los Estados Unidos, además de socavar el desempeño económico y el equilibrio macroeconómico de México, con consecuencias políticas y sociales a nivel nacional y bilateral. Ello explica por qué la administración de Peña aceptó pasar de un acuerdo que se había gestado bajo la retórica del "libre comercio" a otro dominado abiertamente por principios proteccionistas y de comercio administrado.

Fue, en muchos sentidos, la ruptura de la narrativa neoliberal -libre comercio y rearticulación de las cadenas de valor a nivel trilateral para elevar la competitividad de la región- bajo la cual se había fincado no solo el TLCAN, sino todos los acuerdos de libre comercio que se habían desprendido del modelo original para el resto de las Américas y de otros países extrarregionales, incluyendo la última versión del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) que todavía el presidente Barack Obama llegó a firmar con 11 países ribereños del Pacífico americano y asiático pero que Donald Trump anuló en los primeros días de su gobierno. El fin de la narrativa neoliberal, al menos como instrumento de gobernanza comercial, no fue substituido en ese entonces por una nueva visión de lo que Trump esperaba del reacomodo de las relaciones económicas y geopolíticas que su discurso nacionalista, xenóforo y proteccionista desencadenó. Washington privilegió las políticas unilaterales, recurriendo incluso a chantajes y ataques de todo tipo, con el fin de asegurar a los votantes estadounidenses que los intereses de Estados Unidos estaban por encima de todos los demás países. Es bajo esta misma óptica que también se salió del Acuerdo de París, que entró en vigor en 2016 y al cual el presidente Obama se había adherido, y puso en jaque la alianza transatlántica con Europa al escalar sus medidas proteccionistas hacia el Viejo Continente y sus críticas hacia la Organización del Atlántico Norte (OTAN).

En efecto, uno de los distintivos de la era Trump fue iniciar una suerte de "guerra comercial" teniendo como blanco tanto a sus aliados norteamericanos y europeos, como a sus rivales chinos. En la retórica de Trump, la "competitividad" de la economía estadounidense debía fincarse en el proteccionismo y en privilegiar las fuentes de empleo en los Estados Unidos, y no en los acuerdos de libre comercio firmados por administraciones pasadas y que habían minado la competitividad de su país. El indicador que Trump

utilizó para ello fue la evolución del déficit en cuenta corriente respecto a sus principales socios comerciales.

**FIGURA 1. Déficit en la cuenta corriente de EEUU con principales socios (millones de dólares)**



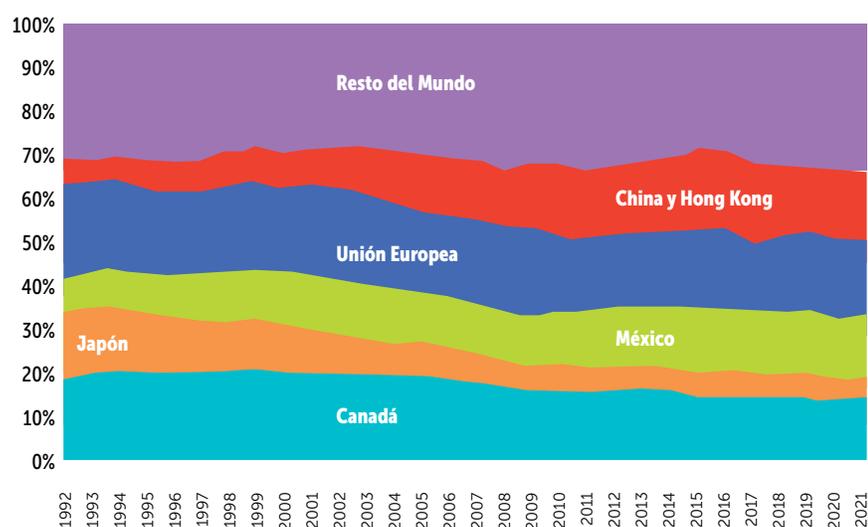
**FUENTE:** Elaboración propia del autor con datos del *Bureau of Economic Analysis*.  
Website: <http://www.bea.gov/international/index.htm>

A lo largo del presente siglo, el déficit en la balanza de bienes y servicios de Estados Unidos con China, México y la Unión Europea se ha sin duda profundizado, no así con Japón y Canadá. En 2018, cuando Trump enfoca su guerra comercial con China, el déficit con este país representaba 60% del total, mientras que con México era el 14% y con la Unión Europea el 19%. Una vez que los aranceles tuvieron como blanco especial al dragón asiático, el déficit con dicho país empezó a declinar, como se aprecia en el Gráfico 1. Es importante subrayar que, si bien el monto absoluto de dicho déficit en 2021 es similar al de dos años antes, en términos relativos la reducción fue mucho mayor, ya que para esa fecha representaba 36% del déficit total. En otras palabras, la llamada guerra comercial con China logró relocalizar las importaciones chinas con otros países, entre ellos Canadá y México.

El 15 de enero de 2020, Trump llegó a un acuerdo comercial con su rival asiático, llamado de "Fase 1", mediante el cual se acordaron cuotas de exportación de productos estadounidenses en el mercado chino, que

incluían manufacturas, productos agrícolas, insumos y energéticos, cuyo valor debía incrementarse en un total de 200,000 millones de dólares respecto a 2017 (Sutter, 2020). Para entonces Washington había elevado su arancel promedio a las importaciones chinas, alegando violaciones a los derechos de propiedad, barreras de entrada a la inversión y al comercio, y hasta consideraciones de seguridad nacional, de 3.1% vigente en enero del 2018 a 20.9% a la firma del acuerdo. Por su parte, Pekín había subido, como represalia, sus aranceles de 8% en promedio a 20% en el mismo periodo. Mas importante a resaltar es que el grueso de los aranceles estadounidenses se impuso sobre insumos intermedios, cubriendo el 93% de las importaciones chinas, mientras que para los bienes de consumo final y los de capital la cobertura fue de 69% y 47% respectivamente. Por su parte, los aranceles chinos cubrieron 74% de las importaciones de insumos estadounidenses, 46% de los bienes de capital y 38% de los bienes de consumo final (Bown, 2021), a la par que Pekín aceleró la puesta en marcha de un nuevo bloque regional, denominado la Asociación Económica Integral Regional (AEIR), conformado por los 10 países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) y cinco estados de Asia y Oceanía que tienen acuerdos con dicha asociación. Queda claro, por consiguiente, que la disputa comercial ha tendido a desvincular las cadenas de valor que durante los últimos 20 años conformaron el intercambio comercial entre Estados y China y que ha abierto la puerta para reconfigurar los bloques regionales bajo categorías geopolíticas.

**GRÁFICO 2. Estados Unidos. Comercio total de mercancías (exportaciones más importaciones) con países y regiones clave 1992-2021.**



**FUENTE:** Elaboración propia del autor con datos de United States Census. Foreign Trade. <https://www.census.gov/foreign-trade/reference/products/catalog/usatradeonline.html>

Como se puede apreciar en el Gráfico 2, desde que China ingresó a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en diciembre de 2001, su intercambio bidireccional con los Estados Unidos creció vertiginosamente, hasta convertirse en su primer socio comercial, ligeramente por encima de sus socios de América del Norte. Mientras que en el año 2000, la porción de mercado china en la Unión Americana era de 7%, en 2021 era ya del 15%, y eso después del acuerdo de "Fase 1" al que se había llegado durante la administración Trump. En 2017, es decir, en vísperas de la "guerra comercial", dicho porcentaje había subido a casi el 18%.

China se ha convertido en el principal socio no regional de América del Norte, desplazando a Japón y a las principales economías europeas en su participación comercial con América del Norte, principalmente por el lado de las importaciones. El Dragón asiático ha podido más fácilmente penetrar el mercado de Estados Unidos -y norteamericano en general- que lo contrario. Dado el tipo de capitalismo que todavía caracteriza a la economía china -estatista, de partido único y con múltiples barreras de entrada- las exportaciones estadounidenses a dicho mercado han crecido de manera más lenta. Mientras que en el año 2000 representaban 4% del total, en 2021 fueron del 10%; en cambio, las importaciones en esos mismo años representaron 9 y 18% (en 2017 representaron el 22%).

El rápido éxito de China en el acceso a los mercados de América del Norte no puede explicarse únicamente por razones de su peso y estatura económica mundiales, o únicamente por su adhesión a la OMC. Su rápida transformación de una economía cerrada y orientada hacia su mercado interno, a un actor de peso global en los últimos 20 años debe explicarse más por la forma en que sus empresas estatales compiten por los mercados y recursos internacionales, y por la visión específica y los objetivos establecidos y perseguidos por su élite política. En ese sentido, el desequilibrio en la cuenta corriente de Estados Unidos con ese país, no es más que la punta del iceberg de una relación mucho más compleja que encierra tanto una rivalidad de tipo tecnológico como geopolítico, si se toma en cuenta el ambicioso proyecto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), coloquialmente conocida como la nueva ruta de la seda, impulsada por el presidente Xi Jinping desde su llegada al poder en 2013, y su revisionismo en materia de los límites fronterizos de su país en el mar meridional del Pacífico Asiático.

Bajo esta consideración, Canadá y México se mantienen como socios estratégicos con Washington, no sólo por la alta integración y especialización de sus sectores productivos con los de Estados Unidos -en materia agrícola, recursos naturales y energía- sino en la articulación de las cadenas de suministro a nivel continental en industrias clave como la automotriz, acero, química, petroquímica y de maquinaria eléctrica. A pesar del clima hostil en el que se negoció el TMEC, y del sesgo antimexicano que la caracterizó, el

acuerdo se mantiene como el marco estratégico de América del Norte a partir del cual la administración de Joseph Biden comenzó a estructurar su estrategia de respuesta al revisionismo hegemónico de China, tanto más que los resultados esperados de la "Fase 1" -elevar el volumen de exportaciones estadounidenses en China- no ha tenido los resultados esperados<sup>2</sup>.

### III. El regreso del Estado emprendedor y la nueva revolución tecnológica en Estados Unidos

En el hemisferio occidental, Estados Unidos es el que indiscutiblemente ha tomado el liderazgo para articular una nueva política industrial y tecnológica, que inicie una nueva era de crecimiento económico fincado en la transición energética y el internet de las cosas, en donde la oferta descarbonizada de electricidad y la quinta generación de interconexión electrónica están en juego. Con Biden y los demócratas en el congreso, el regreso del Estado emprendedor vuelve a ser el eje de la política económica y social de los Estados Unidos, como lo fue durante la era Roosevelt y en las dos décadas posteriores al término de la Segunda Guerra Mundial. El regreso del Estado promotor se enmarca además con el mandato de defender las instituciones democráticas y republicanas de ese país, que la administración Trump vulneró sobre manera, y de reducir las brechas sociales y raciales que también se ahondaron en los últimos años. Todo ello con la intención de recuperar un liderazgo internacional con sus aliados tradicionales del hemisferio occidental y transatlánticos, y abanderar la lucha contra el cambio climático en los foros multilaterales. Es por ello que uno de los primeros actos de gobierno del presidente Biden fue la reincorporación de su país a los compromisos pactados en el Acuerdo de París.

La nueva política industrial y científica de los Estados Unidos, más que impulsar una industria o sector específicos, busca promover y detonar los precursores de la nueva revolución tecnológica que se está viviendo en materia energética y de movilidad, como una manera de responder al desafío tecnológico y geopolítico del ascenso de China como potencia global. Si bien la administración Biden ha levantado los aranceles impuestos durante la administración Trump a sus socios norteamericanos y transatlánticos, ha sostenido, por el contrario, la mayoría que se impuso a China poco antes del acuerdo firmado en enero de 2020. La rivalidad con dicho país ha tomado un nuevo cariz después de la invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero

---

<sup>2</sup> Para un balance de los resultados obtenidos bajo el acuerdo comercial sinoestadounidense, véase Bown, 2022.

de 2022, y del acercamiento entre Putin y Xi Jinping para redefinir el orden mundial que, hasta ahora, y de acuerdo con la narrativa de ambos, ha favorecido los intereses occidentales.

Los pilares de la nueva estrategia científico-industrial descansan en las tres leyes más importantes que ha logrado aprobar el congreso estadounidense durante la primera mitad del gobierno de Biden, y que serán decisivas para renovar el mandato demócrata en las elecciones intermedias de 2022 y en las presidenciales de 2024. La Ley de Infraestructura (LI), votada en noviembre de 2021, y que agrupa el mayor volumen de inversión pública (1.2 billones de dólares) a ser desembolsado en cinco años, busca modernizar las carreteras, caminos, sistemas de agua potable y de conexión electrónica del país. Además, una partida importante será destinada al desarrollo de la infraestructura de transmisión eléctrica, tecnología de almacenamiento de baterías y abatimiento de emisiones de efecto invernadero para el transporte terrestre (NCSL, 2021 y USDOE, 2021).

El segundo paquete lo consiguió Biden en julio de 2022, después de haber sufrido un serio revés al no ser aprobada su propuesta más ambiciosa conocida como *Build Back Better*, y cuyo monto era superior a los 2.3 billones de dólares. Biden logró superar ese escollo, y mediante la Ley de Reducción de la Inflación (LRI) logró obtener, por parte del congreso, otros 385,000 millones de dólares, desembolsables en 10 años, para apoyar directamente el desarrollo de energías renovables y el impulso de los automóviles eléctricos. Poco después, en agosto de ese año, logró que se votara lo que se conoce como la Ley de Microprocesadores y Ciencia (LMC), que prevé un desembolso de más de 52,000 millones de dólares para impulsar la investigación, producción y desarrollo de los microprocesadores de nueva generación en su país, y así superar el desabasto que la crisis del COVID 19 había generado de estos insumos estratégicos para asegurar la competitividad de la economía estadounidense en la era de la 5G.

En efecto, la LRI y la LMC, incluyen créditos, subsidios y desembolsos tanto para impulsar la generación eléctrica y movilidad de carbono neutro, como para estimular la investigación y el desarrollo de los microprocesadores de nueva generación requeridos por la 5G. Las tres legislaciones buscan detonar regiones deprimidas y grupos poblacionales tradicionalmente marginados, además de dar incentivos para elevar el contenido nacional, y/o regional, en las cadenas de suministro.

La LRI es quizás el proyecto más distributivo de esta nueva política industrial y tecnológica, pues busca captar 737,000 millones de dólares, de los que más de la mitad vendrán por fiscalizar a los grandes ingresos corporativos y la reventa de acciones; de dicho monto, 369,000 millones serán destinados a energía y cambio climático y poco más de 300,000 millones para reducir el déficit público federal. En materia energética y climática, la LRI es

la más ambiciosa de todas, pues lo mismo da créditos a la producción, a la inversión y al consumo para la generación y venta de energía verde, como para la captura de carbono, el desarrollo de celdas de combustibles, nuevas baterías, y automóviles eléctricos, entre otros (IRA, 2022). Lo más controvertido de esta ley es su carácter proteccionista, ya que busca impulsar las cadenas de abastecimiento internas y, en el mejor de los casos, las de América del Norte o, en algunos casos, la de los países que cuentan con un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Estados Unidos. En materia automotriz, por ejemplo, los créditos sólo benefician a los vehículos ensamblados en América del Norte, cuyas reglas de origen exigen además incorporar el acero y otros componentes con los que han sido ensamblados. Con dicha ley, queda claro que Washington busca proseguir con la desarticulación de las cadenas de suministro que se habían entablado con China, para reconstituirlas con países más cercanos, o "near shoring", aunque en la legislación estadounidense se han enmarcado más bien en una especie de "friend shoring"; es decir, con países ubicados ya sea en América del Norte o con quienes se tiene un ALC.

El objetivo de la LMC es mucho más estratégico, pues busca detonar la producción interna de microprocesadores de última generación, a la par de fortalecer la investigación y desarrollo científicos, en un país que, a pesar de haber inventado el "chip", sólo produce nacionalmente el 10% de sus requerimientos, mientras que el 75% de la producción global proviene de los países asiáticos, principalmente de China. La pandemia del COVID 19, como se sabe, provocó una desarticulación en las cadenas de suministro, atizando las presiones inflacionistas, reforzadas aún más por la invasión a Ucrania. Con esta ley, Estados Unidos busca elevar su producción interna, reconfigurar las cadenas de abastecimiento, muy probablemente bajo el principio de la relocalización "amistosa" (friendshoring) --aunque a diferencia de la LRI no se hace explícito-- otorgar créditos de hasta 25% a las nuevas inversiones en este campo, y echar a andar una estrategia de ciencia y tecnología a nivel federal que garantice lo que se ha denominado como la "seguridad económica" de los EE.UU.<sup>3</sup>.

Las dos últimas leyes se lograron votar pocos meses después de la invasión rusa a Ucrania, lo que las enmarca en una nueva reconfiguración geopolítica cuyo resultado final aún no se visualiza. A más de seis meses de guerra, y con la reciente anexión por parte de Rusia de cuatro regiones ucranianas, y la condena que esto ha provocado en la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas, es muy probable que el conflicto se prolongue por tiempo indefinido, con ciclos de alta y baja intensidad que seguirán afectando los precios de los mercados de energéticos, alimentos y materias primas.

---

<sup>3</sup> Para un análisis desagregado de la LMC, véase Bennet, 2022.

Independientemente de la manera en que se resuelva el conflicto armado, y del desequilibrio geopolítico que conlleve, los mercados internacionales tanto de petróleo, gas y carbón han sido afectados, arrastrando incluso los precios de generación de electricidad. Esto es así, porque las sanciones que se han impuesto hasta ahora, y que se mantendrán en un horizonte todavía indefinido, van contra el principal exportador energético del mundo, Rusia, quien en 2022 exportó 8.324 millones de barriles diarios (MBD) de petróleo, 8.038 billones de pies cúbicos (BPC) anuales de gas y 5.99 exajoules de carbón (BP, 2022), la mayoría de ellos dirigidos a los países europeos. Además, 83% de las exportaciones rusas de gas es por ducto (de las que el 85% va a Europa) y el resto por barco, en forma de gas natural licuado (GNL), por lo que una diversificación de sus envíos no es viable en el corto ni mediano plazos. Dado que Moscú es también altamente dependiente de sus ingresos de exportación de fósiles (aproximadamente el 30% de los ingresos fiscales), tanto Putin como los occidentales han sido cautos para potenciar y/o neutralizar el “arma energética” que por ahora Rusia ha sabido explotar.

En consecuencia, el nuevo choque ha mandado señales contradictorias en los mercados energéticos, pues por un lado ha hecho necesario elevar la producción de crudo y gas para paliar la vulnerabilidad de los países europeos frente a los suministros rusos y, por el otro, ha hecho más perentoria la necesidad de acelerar la entrada de renovables, sobre todo para aquellos países que están en condiciones de hacerlo, particularmente en Europa. Lo que este choque también ha dejado en claro, es que el gas natural se consolida como la fuente fósil más limpia y no intermitente para la generación de electricidad.

Estados Unidos es el país que mejor ha quedado posicionado para navegar en aguas tan turbulentas y obtener los mayores beneficios. Por un lado, tiene la capacidad tecnológica, geológica y económica para mantener el ritmo de crecimiento de su oferta petrolera y gasera como para paliar los choques energéticos y, por el otro, ha detonado una revolución industrial que lo podría convertir en el líder de la transición energética a nivel global.

## IV. El repliegue “soberanista” de México y la desavenencia energética con Washington

Desde el principio de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quedó claro que la política exterior no tendría la importancia que tuvo en administraciones anteriores y que frente a Estados Unidos el objetivo principal sería no confrontar a Trump y más bien iniciar una suerte de “luna de miel” con la Casa Blanca. Frente a las bravuconadas desplegadas por el primer mandatario estadounidense (construcción de un muro para

impedir la migración ilegal mexicana y el tráfico de estupefacientes, estigmatización de los migrantes mexicanos), AMLO buscó llegar a un pacto implícito de no confrontación con objeto de evitar descalificaciones violentas o veladas hacia su gobierno. Como presuntamente llegara a aconsejar más tarde a su homólogo argentino, el peronista Alberto Fernández, la no confrontación con el mandamás de la Casa Blanca garantizaba que éste no se involucrara en los asuntos internos de México (Scott y Webber, 2020). De ser cierto dicho consejo, la luna de miel que tanto se esforzó en mantener y cuidar con Trump, incluso hasta después de las elecciones de 2021, tuvo como objetivo ampliar el margen de maniobra interno del gobierno mexicano, en áreas que han resultado ser muy controvertidas en el país, como la “austeridad republicana” en el manejo del gasto público, la militarización creciente de la seguridad pública y el control del ejército de puertos y aduanas con el fin de combatir al narcotráfico, o el manejo de la pandemia del Covid-19, que acumuló durante los dos primeros años del brote un gran número de víctimas y mostró las malas condiciones con las que operaban los hospitales públicos del país.

Al mismo tiempo, la estrategia de no confrontación sigilosamente articulada, tuvo sin duda costos para la relación bilateral, sobre todo en materia de migración, pues México terminó militarizando su frontera sur y aceptando que los migrantes ilegales que eran devueltos de Estados Unidos se quedarán en territorio mexicano. Peor aún, aceptar pasivamente la estrategia de renegociación del TLCAN, bajo amenazas de ruptura, de imposición de aranceles y de legitimación de principios proteccionistas, fortaleció las prácticas unilaterales de Trump frente a temas comunes para América del Norte.

La luna de miel llegó a su clímax cuando en julio de 2020, AMLO realizó su primera visita internacional de Estado a la Casa Blanca, en un momento en que el presidente Trump había iniciado ya su campaña para reelegirse a la presidencia. Dicha visita se hizo para celebrar la puesta en marcha del TMEC, aunque el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se abstuvo de asistir para subrayar su distancia que entonces mantenía con el mandatario estadounidense. Por el contrario, AMLO recalcó la “comprensión” y el “respeto” que Trump había manifestado con México, a pesar de que el país había estado expuesto a presiones de todo tipo --construcción de un muro que los mexicanos pagarían, impuestos al aluminio y al acero durante la negociación del TMEC, amago de imponer aranceles adicionales si México no militarizaba su frontera sur, etc. (Morales, 2020)

Para navegar en aguas tan turbulentas, AMLO se arropó en los principios clásicos de la no intervención en los asuntos domésticos de los estados y del respeto a la soberanía que tanto alimentaron la política exterior de México durante la hegemonía dorada del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con la llegada de Biden y de los demócratas al congreso estadounidense,

AMLO intentó continuar con la misma estrategia, aunque en esta ocasión las desavenencias se hicieron manifiestas. La más importante hasta ahora ha sido en materia energética.

En efecto, desde el principio de su gobierno, AMLO consideró a la reforma energética de 2013, que abrió todas las cadenas de valor de la industria energética mexicana a la participación de la inversión privada, como parte de un proyecto privatizador, mediante el cual se buscó debilitar a PEMEX y la CFE. De acuerdo con el presidente, la reforma no cumplió con su cometido y por ello suspendió la continuación de las licitaciones públicas tanto en materia de petróleo, gas y electricidad. Aunque los cambios constitucionales realizados por la Reforma de 2013 no se han revertido hasta la actualidad, en la práctica, gran parte de la reglamentación secundaria se ha neutralizado y los órganos reguladores y operativos que en principio obtuvieron independencia administrativa, han quedado subordinados a las preferencias del Ejecutivo, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), órgano encargado de garantizar la rectoría del Estado sobre el transporte, distribución y por tanto, la confiabilidad del suministro eléctrico.

La política energética de la actual administración se ha empeñado en regresar a la autosuficiencia energética -esta vez mediante la retórica del rescate de la soberanía- bajo la tutela de PEMEX y la CFE. Sin embargo, dicha autosuficiencia está aún lejos de haberse logrado, ya que hasta ahora PEMEX sólo ha frenado la caída en la producción de petróleo y gas, pero no ha logrado elevarla, lo que ha mantenido el déficit en la balanza de petrolíferos e incrementado las importaciones de gas de Texas, que en la actualidad representan más del 70% del consumo nacional. Esto ha hecho que México haya dejado de ser un país netamente exportador, a uno netamente importador, a diferencia de lo sucedido en los Estados Unidos, donde el desarrollo y la explotación del petróleo y gas de lutitas han hecho prácticamente autosuficiente a ese país en materia de combustibles líquidos y un exportador neto de gas natural.

Sin embargo, lo más controvertido durante la administración actual fue el intento del Ejecutivo por promover una reforma constitucional, que hubiera revertido los logros alcanzados con la Reforma de 2013, al menos en materia de electricidad. La iniciativa mandataba la renacionalización de la generación de electricidad, poniendo en un limbo constitucional a los generadores privados, daba una cuota de mercado (54%) a la CFE, a la par que suprimía o disminuía las atribuciones de los reguladores, como la CRE o el CENACE, entre otras medidas. Una iniciativa de esta naturaleza ponía en jaque las inversiones privadas en generación eléctrica con renovables e implicaba una recarbonización de la industria eléctrica mexicana.

Una posición tan extrema precipitó la creación de un amplio bloque opositor a la reforma constitucional, que aglutinó desde empresarios nacionales e internacionales, hasta partidos políticos de oposición, organizaciones no gubernamentales y opinión pública favorable a la descarbonización. Antes de que se sometiera a votación la reforma constitucional, empresas estadounidenses y mexicanas, así como el gobierno de Estados Unidos, manifestaron su preocupación por los costos políticos y económicos de aprobar la propuesta de reforma constitucional de AMLO. La Secretaria de Energía, Jennifer Granholm, visitó México en enero de 2022 para manifestar su preocupación por las implicaciones de la reforma, advirtiendo de costosas disputas legales si las inversiones estadounidenses se veían afectadas. John Kerry, el representante especial para Cambio Climático de Joe Biden, vino a México tres veces con el mismo propósito. Cartas de congresistas del Partido Demócrata y una declaración de la representante comercial de la Unión Americana, Katherine Tai, subrayaron las consecuencias negativas para la economía mexicana y para la descarbonización energética del país si se aprobaba la reforma constitucional.

Ante la imposibilidad de obtener una mayoría calificada para aprobar el proyecto de reforma constitucional, la Suprema Corte de Justicia se pronunció respecto a una controversia constitucional que había sido promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y los partidos de oposición, a una modificación hecha por AMLO a la Ley de Industria Eléctrica (LIE) en marzo de 2021. Más que declarar constitucional la modificación a dicha ley, la Corte desestimó la controversia sometida por la COFECE, lo que destensó la polarización a la que había llevado el debate sobre la reforma constitucional. Si bien la reforma a la LIE no resultaba tan radical como la reforma constitucional que no avaló el congreso, la controvertida ley enmendada daba prioridad en el despacho eléctrico a las plantas de la CFE sobre las privadas, poniendo en desventaja a los productores privados, tanto de generación térmica como renovable.

La opinión de la Corte evitó escalar las diferencias entre los funcionarios del gobierno estadounidense y el gobierno de López Obrador, pero no impidió que en julio de 2022, Katherine Tai, tal y como lo había advertido, convocara a consultas entre gobiernos, al que posteriormente se adhirió el gobierno de Canadá, con miras a dirimir, en el marco del TMEC, los enmiendas realizadas a la LIE, que daban preferencia en el despacho eléctrico a la CFE sobre las compañías privadas, así como los obstáculos y demoras del gobierno para otorgar permisos de operación y de comercio de gasolinas a los privados, la exención otorgada por la CRE solamente a PEMEX para que siga produciendo diésel por encima de los estándares establecidos y la obligación de las compañías privadas para comprar gas natural a la CFE o a PEMEX (USTR, 2022). Dichos reclamos no aludían a violaciones del capítulo

8 del TMEC, del que tanto se ha vanagloriado el presidente porque garantiza la soberanía del país sobre sus recursos energéticos. Las demandas son por violar los principios de trato nacional y no discriminatorio, otorgado por el acuerdo tanto a los bienes como a las empresas provenientes de los países signatarios, y por el sesgo que ha caracterizado a las decisiones de los órganos reguladores.

Si bien estas desavenencias no han impedido avanzar en otros puntos de la agenda bilateral, como migración o seguridad, han deteriorado sin duda el clima de inversiones en México, sobre todo en materia de generación eléctrica por energías renovables, poniendo al país en sentido contrario a la estrategia verde seguida por los demócratas y Biden, tal y como se apuntó en la sección anterior. Independientemente del resultado final de las consultas y, eventualmente, de la activación de un panel de controversias en el marco del TMEC, la administración AMLO no ha visualizado todavía la ventana de oportunidad que se ha abierto con la revolución científico-tecnológica que se ha iniciado en Estados Unidos y la reconfiguración de los bloques regionales a nivel global debido a la invasión rusa a Ucrania y el recrudecimiento de las tensiones comerciales y geopolíticas de Washington con Pekín. Esta rearticulación del regionalismo, ha hecho de América del Norte y de sus socios, el espacio privilegiado a partir del cual se rearticularán las nuevas cadenas de suministro de la revolución verde estadounidense.

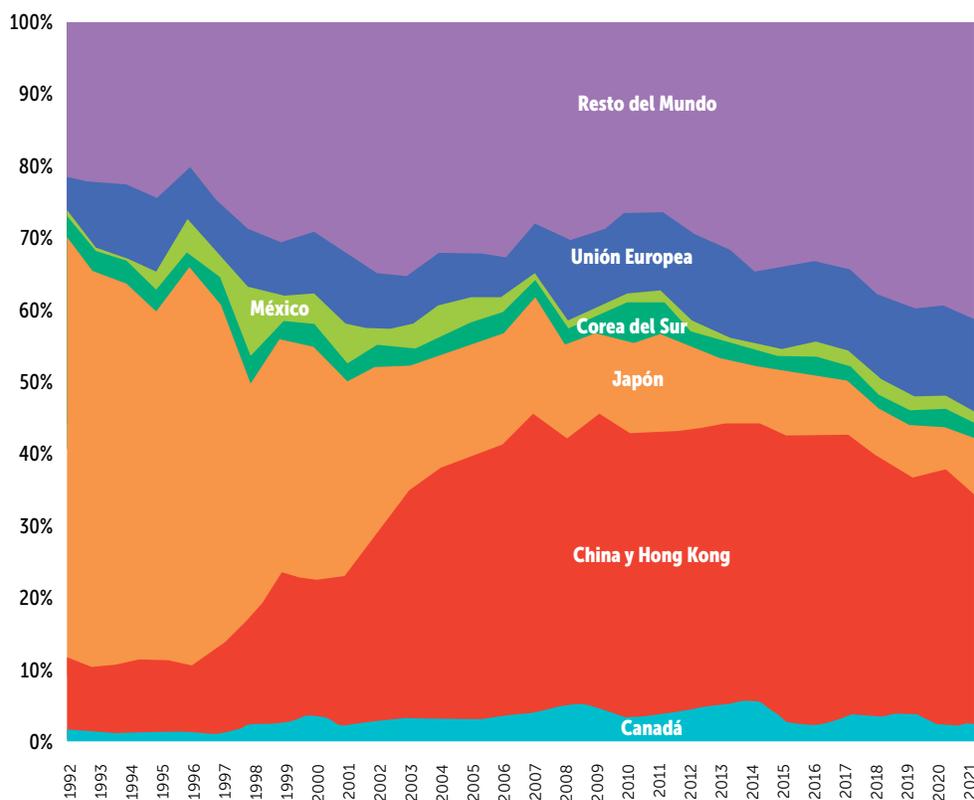
## V. Oportunidades y desafíos de la relocalización "amistosa" para México

Como se estableció en la primera sección de este ensayo, la guerra comercial sinoestadounidense ha buscado ante todo desarticular las cadenas de insumos de productos finales que se habían entretejido con compañías establecidas en Estados Unidos. Por ahora, difícilmente se espera una completa desvinculación de los lazos económicos entre los dos países, tal y como se dio entre Estados Unidos y lo que entonces fue la Unión Soviética. Empero, las tensiones comerciales y las suspicacias geopolíticas, evidenciadas con la reacción virulenta de Pekín después de la visita a Taiwán, de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja del congreso estadounidense, en agosto de 2022, han llevado a la administración Biden a acelerar la interconexión de las cadenas de la emergente economía verde con sus socios preferenciales. Es así como hay que entender el carácter altamente regionalista de las iniciativas adoptadas por el congreso durante los dos primeros años de su gobierno.

Es el caso, por ejemplo, del suministro de minerales críticos para la elaboración de productos requeridos por la economía verde y la quinta

generación de conectividad electrónica. Conforme a la LRI (*supra*), a partir de enero de 2023, las baterías de automóviles eléctricos obtendrán un subsidio de 3,750 dólares si el 40% de dichos minerales provienen de Estados Unidos o de un país con quien tiene firmado un ALC. Dicho contenido regional se incrementará en 10% durante los años subsiguientes, hasta llegar al 80% a partir de 2027 (USDOE, 2022). En el caso de las baterías con celdas de combustible (normalmente de hidrógeno), podrán obtener un subsidio adicional de 3,550.00 dólares, si cumplen con un contenido regional del 50% también a partir de 2023. Para este rubro, la discriminación comercial es aún mayor, pues el contenido regional se contabiliza sólo para América del Norte, y se elevará progresivamente en los años subsiguientes hasta llegar al 100% a partir de 2029.

**GRÁFICO 3. Estados Unidos. Importaciones de celdas y baterías automotrices**



FUENTE: Elaboración del autor con datos de United States Census. Foreign Trade.  
<https://www.census.gov/foreign-trade/reference/products/catalog/usatradeonline.html>

Queda claro, por consiguiente, que la rearticulación de las cadenas de suministros para productos clave en la elaboración de automóviles eléctricos, han quedado excluidos países de Europa, China, Rusia, África y algunos de América Latina, al menos de los subsidios otorgados que a fin de cuentas

funcionarán como impuestos arancelarios. Estados Unidos tiene ALCs con varios países del hemisferio occidental, con la notable excepción de los países del MERCOSUR, Bolivia, Venezuela, Cuba y los países del CARICOM. Independientemente de cómo reaccionen los miembros de la OMC ante semejante legislación, países como México, Chile y eventualmente Colombia y Perú podrían incorporarse a las nuevas cadenas de suministro en materia de minerales críticos, elaboración de baterías y eventualmente partes automotrices para la nueva generación de automóviles eléctricos.

El Gráfico 3 da cuenta de la evolución de las importaciones estadounidenses de celdas de combustible y baterías. Al despuntar el presente siglo, China desplazó a Japón como proveedor principal de estos productos, aunque a partir de 2017 se inicia claramente un esfuerzo por diversificar las compras provenientes de otros países. Los países de la Unión Europea muestran una participación estable como proveedores, y los socios estratégicos de América del Norte, Canadá y México, han tenido una participación más bien marginal, aunque se han mantenido como importadores importantes de las baterías elaboradas en los Estados Unidos. El comportamiento de las importaciones chinas parece sugerir que durante las dos últimas décadas pasadas del siglo, los productores estadounidenses prefirieron desplazar sus abastecimientos de Japón hacia China, por razones económicas y así abastecer el mercado de América del Norte. A partir de las tensiones comerciales de Washington con Pekín, se inicia un punto de inflexión que muy probablemente la LRI profundizará, abriendo posibilidades para que Canadá, México, Corea del Sur y los países latinoamericanos ya mencionados aprovechen las preferencias de entrada que otorga la nueva legislación.

Como es de esperar, el despegue de la economía verde estimulará también una nueva era de extractivismo, que no necesariamente desplazará a las industrias fósiles, ya que, como se ha dicho, el gas natural se mantendrá como la fuente firme para generar electricidad al menos hasta mediados del presente siglo. En ese sentido, México también tiene todavía una ventana de oportunidad para desarrollar su propio potencial gasero, por ahora frenado debido al repliegue soberanista que caracteriza a la administración AMLO.

Los nuevos minerales y metales críticos de lo que se ha nombrado ya como “minería climática”, son aquellos productos altamente requeridos por su capacidad de acumulación y transmisión de calor o electricidad. Los más importantes son por ahora el cobalto, el litio, los grafitos y los metales raros de la tierra, pero el cobre, aluminio, manganeso y zinc pueden también ser utilizados para la elaboración de microprocesadores. El Cuadro 1 da cuenta de los principales países que en la actualidad abastecen a los Estados Unidos de estos productos estratégicos. Como ahí se aprecia, Canadá por ahora provee más de dichos recursos que México, ya que abastece 21% de las importaciones de grafito de su vecino, 95% de cobre, y 23% de zinc, mientras

que por ahora México sólo abastece 7% del grafito y 10% del manganeso. De los países que cuentan con un ALC con Washington, destacan Perú y Chile. El primero abastece el 5% de las importaciones de cobre, pero 77% de las de zinc, mientras que el segundo 52% del litio y 54% de los metales raros. De hecho, Chile y Argentina abastecen prácticamente todas las importaciones de litio requeridas por los estadounidenses.

**CUADRO 1. Estados Unidos. Importaciones de minerales críticos para la movilidad electrónica. Principales países. Porcentajes del total.**

**Año 2021**

**Minerales y metales**

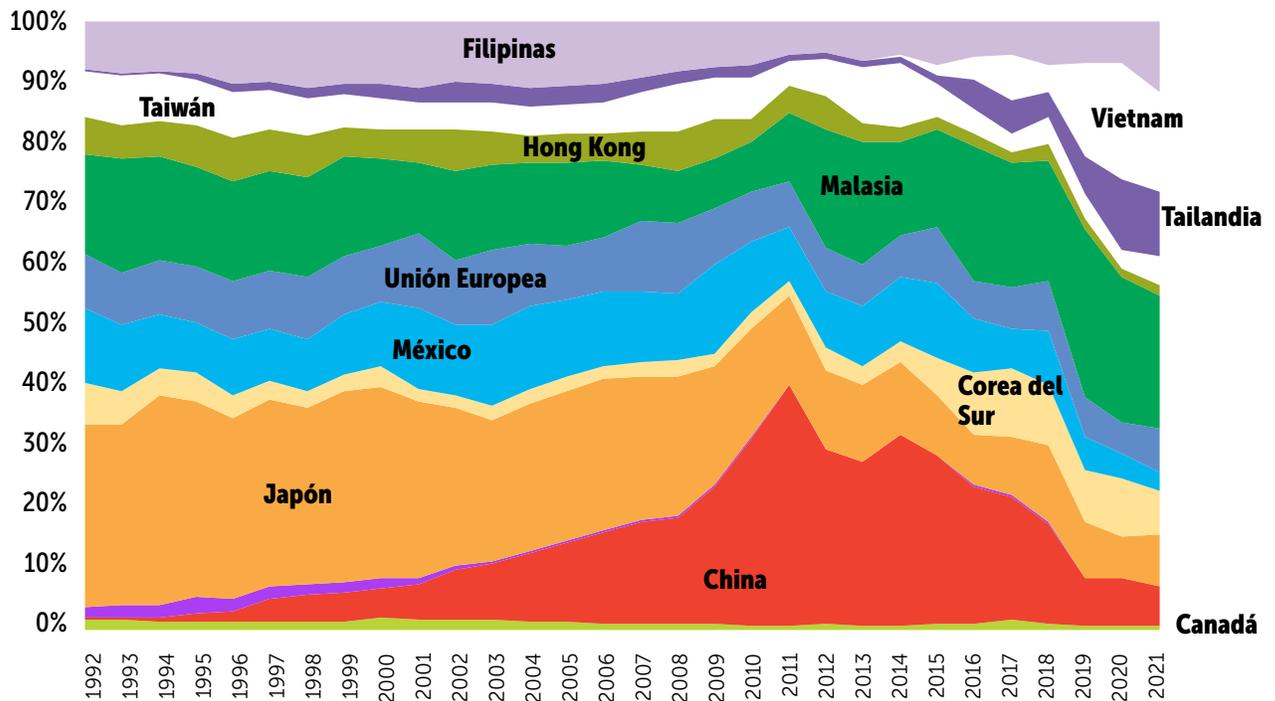
<b>País</b>	<b>Grafito</b>	<b>Manganeso</b>	<b>Cobre</b>	<b>Níquel</b>	<b>Cobalto</b>	<b>Aluminio</b>	<b>Zinc</b>	<b>Litio</b>	<b>Metales raros</b>
Africa del Sur		14%							3%
Alemania				50%	22%				
Argentina								45%	
Austria									5%
Brasil	9%								
Canadá	21%		95%				23%		
Chile								52%	54%
China	47%			50%	62%	23%			
Francia					6%				5%
Gabón		73%							
Guyana						20%			
Hong Kong	3%								
Jamaica						42%			
Japón									20%
Madagascar	8%								
Malasia									3%
México	7%	10%							
Perú			5%				77%		
Reino Unido					10%				
Turquía						10%			
Resto del mundo	7%	3%				4%		2%	9%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>86%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>

FUENTE: Elaboración del autor con datos de United States Census. Foreign Trade.  
<https://www.census.gov/foreign-trade/reference/products/catalog/usatradeonline.html>

Con todo, China sigue siendo un abastecedor clave de minerales críticos para los Estados Unidos. Abastece 47% de sus importaciones de grafito, 50% de las de níquel, 62% de las de cobalto y 23% de las de aluminio. De aplicarse rigurosamente la LRI, habrá una relocalización de dichas importaciones hacia fuentes más “cercanas” o “amistosas”, en las que los acuerdos comerciales o las prioridades geopolíticas podrían jugar un papel decisivo. México ya ha empezado a contabilizar sus reservas de litio creando un organismo público desconcentrado, denominado Litio para México, y cuyo objetivo es desarrollar y explotar las reservas de este recurso, así como administrar sus cadenas de valor. Sin embargo, no está claro el desarrollo futuro de dicho organismo, ni su impacto en el desarrollo de las reservas mineras mexicanas.

A diferencia de las baterías y minerales críticos, en materia de microprocesadores, otro componente de la estrategia verde de Biden, Estados Unidos ha logrado ya desacoplarse considerablemente de las importaciones chinas. Como se aprecia en el Gráfico 4, en 2011 el dragón asiático proveyó 40% de las importaciones estadounidenses, mientras que en 2021 apenas eran 7% del total. El gráfico muestra también el papel clave que han jugado los países del Pacífico asiático, sobre todo Corea del Sur, Malasia, Tailandia y más reciente Vietnam, en el desplazamiento de las importaciones chinas. Cabe recordar que todos estos países pertenecen a la AEIR, el bloque regional más amplio que lidera China y que, como ya se dijo en la primera sección de este trabajo, entró en operaciones a principios de 2022. En otras palabras, la relocalización de las importaciones chinas se ha realizado en países cuyo comercio y, por tanto, cadenas de suministro gravitan en torno al mercado chino. La apuesta de la ATP que Trump echó por tierra al iniciar su administración, tenía como meta incorporarlas al ámbito de los acuerdos comerciales con Washington. Ahora, la administración Biden ha buscado un nuevo acercamiento con dichos países a través del llamado Marco Económico del Indo-Pacífico, en donde la cooperación se ha enmarcado más en términos estratégicos y geopolíticos, ya que ha incluido a la India y una de sus múltiples metas es mantener la región abierta, resiliente, segura y conectada (USDS, 2022). En su primer foro organizado en septiembre de este año, entre los tópicos que se discutieron fueron la resiliencia de las cadenas de abastecimiento y la necesidad de desarrollar infraestructura que despegue a la economía verde.

GRÁFICO 4. Estados Unidos. Importaciones de semiconductores. Principales países 1992-2021



FUENTE: Elaboración del autor con datos de United States Census. Foreign Trade. <https://www.census.gov/foreign-trade/reference/products/catalog/usatradeonline.html>

México, por el contrario, que llegó a abastecer el 15% de las importaciones de su vecino del norte, ha sido desplazado por los países asiáticos, ya que en 2021 sólo le proveyó el 3%. La posibilidad de que México pueda recuperar su porción de mercado al norte de su frontera es sin duda posible, sobre todo porque sus importaciones de microprocesadores provenientes de ahí han estado creciendo. Durante la visita del Secretario de Estado Anthony Blinken a México, en el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel que tuvo lugar a mediados de septiembre de 2022, el funcionario subrayó los desembolsos de dinero público que prevé la LMC de su país, de los que México podría aprovechar para rearticular su producción de microchips con su vecino del norte (Andrade, 2022). Varios estudios prospectivos recientes han resaltado el potencial que México tiene para aprovechar la relocalización cercana o "amistosa" que se ha abierto con el revisionismo geopolítico impulsado por China y Rusia; sin embargo, también han resaltado los principales obstáculos para lograrlo, como la incertidumbre que permea el clima de inversiones en el país, derivado de las desavenencias en materia energética que existen con los inversionistas privados y el gobierno estadounidense, así como el clima de inseguridad y la falta de infraestructura -sobre todo en materia de interconexión eléctrica (Morgan, 2022 y Vásquez, 2022).

## VI. Conclusiones

La llegada de Trump a la Casa Blanca marcó un punto de inflexión tanto en Estados Unidos como en América del Norte. La denuncia de la narrativa neoliberal bajo la cual se había fundado la política comercial estadounidense cimbró las viejas alianzas y atizó las rivalidades emergentes, sobre todo ante el ascenso económico de China. La transición entre el TLCAN y el TMEC se dio en un clima de decisiones unilaterales, xenófobas y racistas por parte del mandatario estadounidense, lo que no impidió la negociación de un acuerdo que, aunque moldeado bajo intereses proteccionistas, reconoció de facto la importancia estratégica de los socios norteamericanos, en un momento en que el acuerdo de Fase 1, pactado con China, formalizaba el desacoplamiento entre la economía de ese país y la de Estados Unidos.

Con el regreso de los demócratas al Congreso y a la Casa Blanca en 2021, Washington logró poner en marcha una política científico-tecnológica, con fuerte impulso gubernamental, que busca hacer de la descarbonización y de la movilidad electrónica de quinta generación la base de un nuevo ciclo económico de innovación y crecimiento, capaz de hacer frente al ascenso tecnológico de China. La apuesta del gobierno de Biden se ha hecho más perentoria a raíz de la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, y que ha abierto un eje entre Moscú y Pekín para redefinir las fronteras geopolíticas regionales y globales. Tanto el inicio del desacoplamiento comercial sinoestadounidense, como el revisionismo geopolítico provocado por la invasión a Ucrania, han marcado el fin de una era de globalización legitimada bajo la narrativa neoliberal occidental y han, por el contrario, sentado las bases para la emergencia de fortalezas regionales cuyas fronteras e interconexiones se harán bajo criterios geopolítico-estratégicos. La vuelta del Estado como ente organizador de la innovación energética, tecnológica, industrial y comercial pareciera ser la consigna bajo la cual los demócratas han regresado al poder para hacer frente a los desafíos de su país; empero, la magnitud del desafío chino y la alianza estratégica pactada con Moscú a raíz de la invasión de Putin a Ucrania, han hecho de la política científico-tecnológica estadounidense un problema de "seguridad económica", tal y como la LMC lo concibe. En otras palabras, la crisis del neoliberalismo inaugurada por Trump no sólo hizo posible el regreso del Estado Promotor tal y como Estados Unidos lo conoció durante la segunda postguerra, sino que además el impulso y dirección gubernamentales se han enmarcado en apuestas de razón de Estado (seguridad económica y nacional) y, por tanto, de cálculos geopolíticos.

Ante semejante encrucijada, el gobierno de Biden ha revalorizado la importancia estratégica de sus aliados, tanto en la OTAN, en Asia central, el Pacífico asiático y por supuesto, el hemisferio occidental. El valor territorial de sus aliados se mide no sólo por la capacidad de ampliar la movilización

armamentística-militar del gobierno estadounidense, tal y como el grupo de Visegrado de la OTAN lo ha mostrado durante la crisis en Ucrania, sino también por su capacidad de reubicar y desarrollar las cadenas de suministro requeridas para asegurar el éxito de la nueva política científico-industrial de Washington.

Es justamente en este último rubro en que América del Norte ha redefinido su importancia geo-estratégica ante Washington. Si bien Canadá se mantiene como un escudo militar de los Estados Unidos bajo la alianza de la OTAN, dado que los conflictos y guerras localizadas regresaron al teatro europeo, y probablemente se extiendan por Eurasia hasta el Mar meridional de China, el valor geopolítico de los aliados norteamericanos radica en su capacidad de seguir abasteciendo de recursos naturales, minerales críticos e insumos manufactureros clave para la transición tecnológico-energética de los Estados Unidos. Es bajo este contexto que debe entenderse la nueva política de rearticulación de cadenas de valor bajo el principio de la relocalización cercana o amistosa. Es bajo esta premisa que se intenta hacer, de América del Norte, una fortaleza económica para asegurar la supremacía tecnológica de occidente frente a China.

Esto sin duda ha abierto desafíos y oportunidades para México. Como socio estratégico de América del Norte, el país ha tenido que absorber el costo de una renegociación unilateral hecha por Trump al "matrimonio de conveniencia" pactado desde la última década del siglo pasado. El repliegue soberanista que ha caracterizado a la administración AMLO, puede entenderse como un escudo defensivo para ampliar el margen de maniobra interno de un gobierno cuya consigna ha sido, desde su inicio, de que la política doméstica es la mejor política exterior posible. Empero, el choque que implicó la pandemia del Covid 19, no sólo en términos económicos sino en vidas humanas, y los cambios vertiginosos que ha conocido el mundo en los últimos tres años, han hecho patente la estrecha interconexión del país con los choques externos. Se podría decir que, en la actualidad, el margen de maniobra interno del gobierno mexicano, así como del éxito de sus políticas públicas, no puede soslayar las limitantes y oportunidades que le ofrece o restringe el entorno geopolítico en que opera.

La próxima administración que releve a la actual, sin importar la coalición política de la que proceda, deberá reconocer esa estrecha interconexión si quiere garantizar, a largo plazo, el éxito de sus políticas públicas. La relocalización amistosa de cadenas de suministro para garantizar el despegue de la economía verde en Estados Unidos, abre sin duda oportunidades que el país podría aprovechar para enderezar su rumbo económico y científico e inaugurar un ciclo de prosperidad de largo plazo. Para ello, las élites políticas y empresariales mexicanas deben entender, no sólo los desafíos que enfrenta hoy el gobierno de los Estados Unidos, sino los propios. Si la

próxima administración se decide finalmente por articular una nueva política industrial que apueste a la descarbonización progresiva de la economía, tendrá también que apuntalarla con una necesaria reforma educativa -hasta ahora pospuesta, fiscal -hasta ahora aplazada, crediticia y de seguridad pública -hasta ahora ausentes. Dicha política tendrá que estar arropada con una nueva política exterior que tome en cuenta el entorno geopolítico cambiante en el que opera el país y que fortalezca la resiliencia del país ante los choques del exterior.



### **Isidro Morales**

**Director en Jefe Latin American Policy.  
Asociado Externo del Centro de Estados Unidos-México, Instituto Baker.  
Profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.**

**ENERO 2025**